




CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA- RAD 20240001600

Desde Thalia Sofia Malaver .. <sofimalaver@hotmail.com>

Fecha Mar 17/09/2024 3:25 PM

Para Juzgado 03 Civil Circuito - Nariño - Pasto <j03ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC juliojavier2@gmail.com <juliojavier2@gmail.com>; jhonatanacero80@gmail.com
<jhonatanacero80@gmail.com>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

170924 CONTESTACIÓN Y ANEXOS JDAS.pdf; 170924 LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y ANEXOS JDAS.pdf;

Señora

JUEZ 03 CIVIL CIRCUITO DE PASTO -NARIÑO

RADICADO. 2024-00016

DEMANDANTES. LUCIA RODRÍGUEZ Y OTRA

DEMANDADO. JONATAN ACERO SÁENZ

THALÍA SOFÍA MALAVER MORA, identificado con cédula de ciudadanía 1018485639 de Bogotá y T.P. 361287, actuando como apoderada especial de JONATAN DESIDERIO ACERO SÁENZ, por medio de la presente, descorro traslado de la contestación de la demanda.

Adicionalmente remito el llamando en garantía a la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Con base en lo que dispone el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, copio este mensaje a los demás sujetos procesales.

Adjunto archivos de contestación de demanda y llamamiento en garantía, en formato PDF y debidamente enumerados.

Cordialmente,

SOFÍA MALAVER MORA
APODERADA PARTE DEMANDADA
CEL 3103618332

SOFÍA MALAVER MORA
ABOGADA PARTE DEMANDADA

18/9/24, 8:40

Correo: Juzgado 03 Civil Circuito - Nariño - Pasto - Outlook

CEL 3103618332

TP 361287

BOGOTÁ D.C

Obtener [Outlook para iOS](#)

Doctora
MARTHA LIDA ROSERO DE BASTIDAS
JUEZA
Juzgado Tercero Civil de Circuito
Pasto- Nariño
E.S.D.

REFERENCIA. RADICADO NO. 2024-00016
DECLARATIVO VERBAL- RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.
DEMANDANTE. OLGA LUCIA RODRIGUEZ Y OTRO
DEMANDADO. JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ
LLAMADA EN GARANTÍA. SURA.

ASUNTO. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

THALIA SOFÍA MALAVER MORA, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada del demandado **JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ**, conforme al poder que obra en su despacho y a la providencia emitida por el mismo, mediante la cual se me reconoció personería adjetiva para actuar dentro del proceso de referencia. Dentro del término legal otorgado, manifiesto desde ya mi oposición a las pretensiones de los demandantes, conforme a los fundamentos fácticos y jurídicos que se exponen a continuación:

I. EN CUANTO A LOS HECHOS

PRIMERO. A mi representado no le consta el hecho alegado por la parte demandante, toda vez que dicho acontecimiento le resulta completamente ajeno. En virtud de lo anterior, y con fundamento en las disposiciones procesales aplicables, solicito que los hechos referidos en el presente numeral sean acreditados mediante la práctica de los medios probatorios que resulten útiles, conducentes y pertinentes para tal fin, en los términos previstos por la normatividad vigente.

SEGUNDO. Es cierto lo afirmado respecto de la edad del menor Edy Santiago Flórez Rodríguez al momento de su deceso, lo cual se encuentra debidamente acreditado con el registro civil de nacimiento aportado por la parte demandante. No obstante, en lo que respecta a las demás circunstancias invocadas por la demandante, estas no le constan a mi representado, toda vez que son hechos ajenos a su conocimiento. En consecuencia, solicito que tales afirmaciones sean debidamente acreditadas por la parte actora a través de los medios probatorios pertinentes, conducentes y legalmente admisibles, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad procesal vigente.

TERCERO. Es cierto, tal como se establece en el Informe de Necropsia No. 2018010152001000398, el cual ha sido allegado al acervo probatorio documental aportado por la parte demandante.

CUARTO. Es cierto en lo que respecta a que el vehículo de placas EDX 799 era conducido por mi representado al momento de los hechos. Sin embargo, las demás afirmaciones constituyen una apreciación subjetiva por parte de los demandantes. En consecuencia, solicito que tales afirmaciones sean debidamente acreditadas por la parte actora a través de los medios probatorios pertinentes, conducentes y legalmente admisibles, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad procesal vigente.

QUINTO. Es cierto que el vehículo identificado con las placas EDX 799, de propiedad de mi representado, se encontraba amparado por una póliza de seguro todo riesgo debidamente vigente al momento en que ocurrieron los hechos objeto del litigio.

SEXTO. Este no es un hecho de la demanda, sino una apreciación subjetiva de los demandantes. No obstante, se insta respetuosamente al Despacho a considerar que, según el Informe de Policía de Accidentes de Tránsito (IPAT) C.00752096, el vehículo identificado con placas EDX 799, de propiedad del demandado, no fue imputado en ninguna hipótesis de accidente de tránsito. Además, en el mismo informe no se registró evidencia de huellas de frenado ni de arrastre que sustente el presunto exceso de velocidad atribuido al demandado. Por lo tanto, solicito que se valore la pertinencia de los medios probatorios útiles, conducentes y necesarios que permitan acreditar lo manifestado por la parte actora en este numeral, conforme a las disposiciones procesales vigentes.

SÉPTIMO. La afirmación invocada por la parte actora no corresponde a un hecho fáctico propio de la demanda, sino a una apreciación subjetiva de los demandantes. Sobre el particular, es imperativo que el Honorable Despacho tenga en cuenta que no existe prueba idónea que acredite dicha circunstancia. En consecuencia, solicito que se valoren los medios probatorios pertinentes, útiles y conducentes que respalden las afirmaciones realizadas por la parte actora en el presente numeral, en los términos establecidos por la normatividad procesal vigente.

No obstante, conforme a lo consignado en el Informe de Policía de Accidentes de Tránsito (IPAT) C.00752096, el vehículo tipo motocicleta identificado con las placas AYE 92E, conducido por el menor Edy Santiago Flórez Rodríguez, fue imputado bajo las hipótesis de accidente No. 139, correspondiente a impericia en la conducción, y No. 099, relativa a la omisión en el uso de señales reflectivas o luminosas. A lo anterior se suma el hecho de que el menor no contaba con la licencia de tránsito requerida.

OCTAVO. La afirmación invocada por la parte actora no corresponde a un hecho fáctico propio de la demanda, sino a una apreciación subjetiva de los demandantes. En cualquier caso, dichas circunstancias no le son imputables, ni guardan relación alguna con los hechos objeto de controversia.

Por lo tanto, no resultan relevantes ni idóneas para fundamentar la supuesta responsabilidad de mi representado, y deben ser desestimadas en el presente proceso.

NOVENO. No le constan a mi representado lo esgrimido por el extremo actor en el presente numeral. En todo caso, dichas circunstancias no son atribuibles a mi representado ni tienen relación con su conducta durante el evento, motivo por el cual no resultan pertinentes para derivar responsabilidad alguna en su contra.

DÉCIMO. No corresponde a la verdad lo afirmado por la parte actora, como claramente se desprende del Informe de Policía de Accidentes de Tránsito (IPAT) No. C.00752096, en el cual se concluye que el menor Edy Santiago Flórez Rodríguez fue quien actuó con imprudencia, negligencia e impericia, de conformidad con la hipótesis No. 139, que alude a "Impericia en el manejo". Adicionalmente, dicho menor omitió el uso de señales reflectivas o luminosas, sumado al agravante de no poseer licencia de tránsito, todo ello en circunstancias de circulación a altas horas de la noche, lo cual puso en riesgo no solo su propia integridad, sino la seguridad de los demás usuarios de la vía.

De igual manera, las afirmaciones contenidas en los numerales a, b, c y d no constituyen hechos propiamente dichos, sino preceptos normativos del Código Nacional de Tránsito, cuya supuesta violación ha sido alegada por la parte actora sin ningún respaldo probatorio. En consecuencia, debe observarse lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.), respecto a la carga probatoria, siendo obligación de la parte demandante demostrar sus alegaciones mediante los medios probatorios idóneos, pertinentes y conducentes para tal fin.

DÉCIMO PRIMERO. Esta es una afirmación que no le consta a mi mandante y dado que se sustenta en una experticia aportada unilateralmente por la parte demandante, dicha prueba, en caso de ser decretada, deberá someterse a contradicción y valoración en juicio, conforme a las disposiciones del Código General del Proceso (C.G.P.) relativas a la apreciación de los medios probatorios de esta naturaleza.

DÉCIMO SEGUNDO. Lo expuesto no constituye un hecho propiamente dicho de la demanda, sino una mera apreciación subjetiva por parte de los demandantes. En virtud de lo anterior, no corresponde a esta parte pronunciarse sobre dicha afirmación, la cual deberá ser corroborada o desvirtuada en el curso del debate probatorio, conforme a lo establecido en las normas procesales aplicables.

DÉCIMO TERCERO. Es cierto, tal como lo establece la consulta del sistema SPOA, allegada en el acápite de pruebas documentales, el proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar ante la Fiscalía 07 Seccional de Pasto, Nariño.

DÉCIMO CUARTO. A mi representado no le consta el hecho alegado por la parte demandante, toda vez que dicho hecho le es completamente ajeno. En consecuencia, y con fundamento en las

disposiciones procesales vigentes, solicito que se acrediten los hechos mencionados en el presente numeral mediante la práctica de los medios probatorios que resulten útiles, conducentes y pertinentes para tal fin.

DÉCIMO QUINTO. A mi representado no le consta el hecho alegado por la parte demandante, toda vez que dicho hecho le es completamente ajeno. En consecuencia, y con fundamento en las disposiciones procesales vigentes, solicito que se acrediten los hechos mencionados en el presente numeral mediante la práctica de los medios probatorios que resulten útiles, conducentes y pertinentes para tal fin.

DÉCIMO SEXTO. Es cierto, así se lo establece el poder allegado en las pruebas documentales por la parte actora.

II. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

ME OPONGO A LA TOTALIDAD de las pretensiones incoadas por la parte demandante, por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad. Como quiera que al hacer la narración de los supuestos hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró. Toda vez que en estos casos de concurrencia de causas por actividades peligrosas impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, de la cuantía del supuesto detrimento y la relación de causalidad entre uno y el otro.

Aunado a lo anterior, no se vislumbran los elementos sine qua non para declarar una responsabilidad en el caso que nos ocupa. Lo anterior, toda vez que i) No puede endilgarse responsabilidad al extremo demandando, por cuanto en el presente asunto se configuró el hecho exclusivo de la víctima y ii) No existe responsabilidad civil atribuible al extremo pasivo de la Litis ante la falta de acreditación de la relación de causalidad.

OPOSICIÓN FRENTE A TODAS LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y DE CONDENA.

PRIMERA. ME OPONGO a que se declare a Jonatan Desiderio Acero Sáenz, civilmente responsable de la muerte de Edy Santiago Florez Rodríguez, ocurrida el 14 de octubre de 2018 en la vía Pasto-Mojarras, toda vez que la responsabilidad no ha sido declarada judicialmente.

SEGUNDA. ME OPONGO a que se declare a Jonatan Desiderio Acero Sáenz, responsable de los presuntos daños y perjuicios causados a las demandantes, con ocasión al accidente ocurrido el 14 de octubre de 2018 en la vía Pasto-Mojarras toda vez que la responsabilidad no ha sido declarada judicialmente.

TERCERA. ME OPONGO a que se condene a Jonatan Desiderio Acero Sáenz, al pago de indemnización total por los presuntos daños y perjuicios causados a los demandantes, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 14 de octubre de 2018, refiriéndome a cada una de ellas así:

1. **DAÑOS MORALES. ME OPONGO** a que se condene al demandado al pago de la suma reclamada por concepto de daño moral en favor de las demandantes Olga Lucía Rodríguez Romero y Diana Lizeth Flórez Rodríguez, toda vez que la cuantía señalada en la demanda ha sido incorrectamente tasada. En materia de responsabilidad civil, la determinación del perjuicio moral corresponde exclusivamente al juez, quien debe realizar su tasación con base en el acervo probatorio allegado por la parte actora. Es necesario señalar que la carga de la prueba recae en las demandantes, quienes tienen la obligación de demostrar la existencia del daño alegado, así como su magnitud e intensidad, de manera que el juez pueda establecer de forma objetiva el perjuicio sufrido. Por lo tanto, la condena solicitada carece de fundamento, ya que no se han acreditado debidamente los elementos esenciales para su procedencia.
2. **DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN. ME OPONGO** a que se condene al demandado a pagar a favor de las demandantes Olga Lucía Rodríguez Romero y Diana Lizeth Flórez Rodríguez por concepto de daño a la vida de relación la cuantía indicada en la demanda, por no existir fuente obligacional entre las partes, por ausencia de responsabilidad por parte de Jonatan Desiderio Acero Sáenz.

CUARTA. ME OPONGO a esta pretensión por dos razones principales: en primer lugar, no es procedente imponer condenas, ni mucho menos intereses, sobre sumas que no han sido establecidas o probadas en debida forma. En segundo lugar, las sentencias disponen un plazo específico para el cumplimiento de las obligaciones, el cual no coincide ni debe confundirse con el término de ejecutoria de las mismas, ya que ambos responden a conceptos jurídicos diferentes.

QUINTA. ME OPONGO a esta pretensión, toda vez que, como se demostrará a lo largo del proceso, no existe fundamento para imponer condena alguna en contra de mi representado. En consecuencia, serán los demandantes quienes deberán ser condenados al pago de las costas procesales y agencias en derecho, al no prosperar las pretensiones que han formulado.

III. EXCEPCIONES DE MÉRITO O DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CAUSA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

En primer lugar, es fundamental señalar que en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de octubre de 2018 no existe responsabilidad alguna atribuible a Jonathan Desiderio Acero Sáenz. Por el contrario, el siniestro fue causado por un hecho exclusivo de la víctima, atribuible al menor Edy Santiago Flórez

Rodríguez, quien conducía el vehículo tipo motocicleta de placas AYE 92E. De acuerdo con el Informe Policial de Accidente de Tránsito C-.00752096, el primer respondiente concluyó que la causa probable del accidente era imputable al menor Edy Santiago Flórez Rodríguez, señalando las hipótesis 139, que corresponde a impericia en el manejo, y 099, que hace referencia a la falta de uso de señales reflectivas o luminosas. Además, se determinó que el menor no contaba con licencia de conducción, lo que denota una conducta temeraria por parte del menor.

Este hecho es determinante, ya que establece que la víctima, al ponerse en una situación de riesgo al conducir sin cumplir los requisitos legales, como la licencia de conducción, asumió las consecuencias de su actuar. Por lo tanto, resulta evidente que el accidente fue causado por la falta de pericia por parte del menor Edy Santiago Flórez Rodríguez, quien, al actuar de manera imprudente, puso en peligro su propia vida, agravando la situación al no contar con los elementos de protección requeridos. Ejercer la conducción, catalogada en el ordenamiento jurídico como una actividad peligrosa, requiere cumplir con las exigencias legales, como contar con la licencia de conducción, que garantiza la capacitación mínima para la operación de un vehículo automotor en condiciones seguras. En este caso, el menor no midió adecuadamente los riesgos inherentes a su conducta, lo que configura el hecho exclusivo de la víctima.

El hecho de que la víctima condujera una motocicleta sin contar con una licencia de conducción válida constituye una grave infracción a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), que establece como obligación ineludible que todo conductor cuente con una licencia de conducción. Al incumplir con esta obligación, el menor asumió los riesgos inherentes a la conducción sin la pericia mínima exigida por la ley.

Asimismo, el informe de las autoridades de tránsito concluyó que el accidente se debió a la falta de pericia por parte del menor, lo cual refuerza la conclusión de que el siniestro fue provocado por su inexperiencia y falta de habilidad para controlar el vehículo en las circunstancias del caso. En este contexto, queda claro que la causa eficiente del daño no puede atribuirse a mi representado, sino exclusivamente al actuar imprudente y antijurídico de la propia víctima.

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO				
DEL CONDUCTOR	139	099	DEL VEHÍCULO DE LA VÍA	DEL PEATÓN DEL PASAJERO
OTRA			ESPECIFICAR CULPA:	
12. TESTIGOS				
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
13. OBSERVACIONES:				
Impericia en el Manejo y NO hacer uso de Señales Reflektivas o luminosas. Estas Hipótesis es el conductor de la Horta.				

Imagen 1. Informe Policial de Accidente de tránsito No.00752096.

Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado con claridad que, cuando la conducta imprudente de la víctima es suficiente para causar el daño, el extremo pasivo de la litis debe ser exonerado de toda responsabilidad, así:

“La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.

(...)

Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella.

(...)

En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aun cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño)

*Así lo consideró esta Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima, **porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona**”.* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)¹.

En concordancia con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, es evidente que, si el daño alegado se originó como consecuencia de un hecho exclusivo de la víctima, el presunto responsable debe ser exonerado de toda responsabilidad civil. En el presente caso, la imprudencia e impericia del menor Edy Santiago Flórez Rodríguez constituyen factores esenciales y determinantes en la ocurrencia del accidente de tránsito registrado el 14 de octubre de 2018. En virtud de lo anterior, resulta

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez.

jurídicamente improcedente imputar responsabilidad al demandado, razón por la cual este Despacho deberá proceder a denegar las pretensiones contenidas en la demanda.

2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DEL DEMANDADO POR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD.

Para que se pudiera configurar la responsabilidad a cargo del extremo pasivo de la litis, era necesario que el extremo actor desde la presentación de la demanda probara el factor estructural de la responsabilidad, esto es, la relación de causalidad entre la supuesta acción desplegada por Jonathan Desiderio Acero Saenz y los daños pretendidos por las demandantes. No obstante, como resultó probado en el plenario, el accidente de tránsito acaecido el 14 de octubre de 2018 se produjo por el actuar negligente imprudente parte del menor Edy Santiago Florez Rodriguez al conducir sin licencia de conducción al ejercer una actividad catalogada como peligrosa por el ordenamiento jurídico colombiano como es la conducción de vehículos. Es pertinente resaltar que, aun cuando se ha configurado una causal exonerativa derivada del comportamiento negligente e imprudente de la víctima, no se allegó al expediente prueba alguna que acredite de manera inequívoca la existencia de un nexo causal entre los daños alegados y la conducta atribuida al extremo pasivo de la litis.

De conformidad con los mandatos legales y jurisprudencias fijados para que se configure la responsabilidad civil a cargo de Jonathan Desiderio Acero Saenz, es necesario que concurren tres elementos: (i) El daño (ii). El hecho dañoso atribuible al demandado y (iii) la relación de causalidad entre estos dos factores. La doctrina ha precisado estos elementos de la siguiente manera:

*“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. **El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.**”²* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Con respecto al tercer elemento, el nexo causal, es imprescindible señalar que la teoría de la causalidad predominante en el ordenamiento jurídico colombiano es la teoría de la causalidad

² Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008

adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que se limita a aplicar el método de la supresión mental hipotética para verificar si la supresión de un hecho habría evitado la producción del resultado, la teoría de la causalidad adecuada exige un análisis más riguroso. Este criterio introduce un filtro selectivo, de modo que, entre la pluralidad de causas que pueden presentarse en el plano fenomenológico y que constituyen condiciones sine qua non, solo se considerarán jurídicamente relevantes aquellas cuyo resultado era objetivamente previsible, conforme al curso normal de los acontecimientos.

Por otra parte, se entiende por actividad peligrosa aquella que, por su propia naturaleza, puede generar daños incontrollables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología al referirse a las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas que caracterizan a la sociedad del riesgo contemporánea. En consecuencia, la obligación de indemnizar, en este tipo de responsabilidad, no puede depender del control o previsión de las consecuencias, pues ello implicaría adoptar un criterio de imputación fundado en la previsión de lo imprevisible. En este contexto, la labor persuasiva debe orientarse a determinar cuál de los comportamientos antijurídicos fue efectivamente el causante del daño. Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“(...) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo”³

En efecto, la responsabilidad civil tiene como fundamento el deber de reparar un daño originado en un hecho que no proviene de un incumplimiento de carácter obligacional, sino que surge entre sujetos vinculados únicamente por el azar. En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual derivada de actividades peligrosas, como lo es la conducción de vehículos automotores, se exige: (i) que la víctima demuestre el daño, el ejercicio de la actividad peligrosa y el nexo causal entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse de responsabilidad, salvo disposición normativa en contrario, acreditando la existencia de una causal eximente que rompa el nexo causal; y (iii) que, en los casos de concurrencia de actividades peligrosas, el juzgador deba evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, con el propósito de establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los intervinientes.

En consecuencia, la investigación debe centrarse en determinar si la relación de causalidad fue interrumpida o, en su defecto, ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima entre los

³ Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300

diversos antecedentes que, de manera hipotética, pudieron haber ocasionado el daño. Solo deben considerarse aquellos factores que, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia, posean la aptitud suficiente para producir el resultado dañoso, excluyendo aquellos que emerjan como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, el extremo actor no logró acreditar los elementos necesarios para estructurar un juicio de responsabilidad, pues no existe prueba que demuestre la relación de causalidad entre los daños alegados y la conducta del conductor del vehículo de placas EDX 799, Jonatan Desiderio Acero Sáenz. Por el contrario, según el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), resulta evidente que la causa eficiente del accidente fue la falta de pericia del menor Edy Santiago Flórez Rodríguez.

Es preciso reiterar que resulta manifiesta la inexistencia de la relación de causalidad, toda vez que la ocurrencia del accidente fue atribuible exclusivamente a la conducta irresponsable e imprudente del menor Edy Santiago Flórez Rodríguez. Esta afirmación se sustenta en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), en el cual el agente de tránsito competente constató la falta de pericia del hoy fallecido. En este sentido, la relación de causalidad que la parte demandante pretende acreditar en este proceso no se encuentra respaldada por prueba documental alguna ni por ningún otro elemento probatorio que permita configurarla. Por el contrario, del análisis integral de las pruebas documentales se desprende que en este caso operó la causal exonerativa del hecho exclusivo de la víctima. En consecuencia, al no estar acreditado el nexo causal, resulta jurídicamente improcedente atribuir responsabilidad alguna a la parte demandada, ya que no se ha demostrado uno de los elementos estructurales esenciales de la responsabilidad civil.

En ese sentido, es evidente que, para determinar la responsabilidad atribuible al extremo pasivo en el proceso, debe probarse la relación de causalidad, como elemento estructural de la responsabilidad civil. Así mismo, como se ha mencionado previamente, la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el extremo actor, quien debe acreditar la existencia de dicho nexo mediante pruebas útiles, pertinentes y conducentes. Solo cuando la relación de causalidad sea demostrada de manera fehaciente, podrá endilgarse responsabilidad al extremo pasivo. De lo contrario, las pretensiones deberán ser declaradas improcedentes.

En síntesis, considerando el actuar negligente e imprudente del menor Edy Santiago Flórez Rodríguez, y al no existir prueba que acredite la existencia de la relación de causalidad entre el supuesto daño alegado y la conducta del demandado, resulta jurídicamente improcedente imputar cualquier tipo de responsabilidad al extremo pasivo. En otras palabras, no existe una relación de causalidad entre el supuesto hecho dañoso y el daño alegado. En conclusión, no se ha probado la existencia de dicho nexo causal entre el supuesto hecho y el daño reclamado, pues, como ha quedado demostrado, en este caso operó la causal exonerativa derivada del actuar negligente e imprudente de la víctima, lo que rompió cualquier nexo causal que se pretendiera establecer.

Adicionalmente, se debe subrayar que no se ha presentado prueba alguna en el plenario que acredite que el accidente de tránsito fue causado por el vehículo de placas EDX 799. Esta omisión refuerza la ausencia del nexo causal, elemento esencial cuya demostración recae exclusivamente en el extremo actor. La falta de evidencia adecuada y suficiente que vincule el daño alegado con la conducta del demandado impide establecer la relación de causalidad necesaria para imputar responsabilidad.

En virtud de lo anterior, y dado que el extremo actor no ha cumplido con la carga probatoria establecida, corresponde la negación de las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, solicito respetuosamente que se declare probada la excepción planteada y, en su mérito, se desestimen las pretensiones formuladas por la parte demandante.

3.IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO MORAL POR TASACIÓN EXORBITANTE DEL DAÑO.

Es necesario señalar que los daños morales alegados por la parte demandante no han sido debidamente probados en el presente proceso. No obstante, en el supuesto de que se llegara a una condena, será competencia del Juez determinar el monto de la indemnización, basándose en los criterios de la sana crítica. En este sentido, se debe tener en cuenta que los topes indemnizatorios establecidos por la jurisprudencia deben ser rigurosamente respetados.

Cabe destacar que el monto solicitado por la parte demandante excede de manera manifiesta los límites razonables previstos por la normativa y la jurisprudencia aplicable. Es importante recordar que, en casos como el presente, los daños morales no se presumen, sino que deben ser probados y evaluados conforme a los parámetros establecidos. Al respecto, la doctrina ha sostenido que:

*“En efecto, las circunstancias del inmenso dolor que se refleja en la ferocidad y barbarie de las acciones padecidas por los demandantes daban, con toda seguridad, lugar a que el Tribunal impusiera una condena acorde con esa realidad, así fuese tomando la suma que como guía por entonces tenía la Corte establecida desde 2012 y que, frente a la indecible atrocidad de los eventos narrados y probados en este proceso ameritan –para este caso particular- **una suma mayor a la que entonces tenía dispuesta (\$60,000,000.00) y que hoy reajusta a setenta y dos millones de pesos (\$72,000,000.00) para el daño moral propio sufrido por los demandantes a raíz del fallecimiento de padres, hijos, esposos y compañeros permanentes, la mitad de ese valor para hermanos, abuelos y nietos y la cuarta parte para el resto de parientes**, conservando de esa forma el criterio establecido por la sala de decisión civil del Tribunal en cuanto a que, las circunstancias modales que hubieron*

de sufrir los reclamantes fueron, en términos generales, las mismas y el parámetro de una tasación similar, en consecuencia, se impone.”⁴ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En los anteriores términos me permito solicitar al señor Juez se sirva declarar como fundada la excepción planteada y como consecuencia de ello se deniegue las pretensiones atacadas.

4.IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

Sobre el particular, es pertinente destacar que tanto la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado como la de la Honorable Corte Suprema de Justicia han establecido de manera clara y categórica la distinción entre el denominado daño a la vida en relación, anteriormente restringido al perjuicio fisiológico, y el perjuicio moral subjetivo. En este contexto, la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha expresado lo siguiente:

“(…) el daño a la vida de relación y el moral son distintos, habida cuenta que el primero se refleja sobre la esfera externa del individuo, es decir, tiene que ver con las afectaciones que inciden en forma negativa en su vida exterior, concretamente, alrededor de su actividad social no patrimonial, mientras que el segundo recae sobre la parte afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc.”⁵

Como se desprende de la cita jurisprudencial, a diferencia de lo que ocurre con el daño moral subjetivo, cuyo campo de afectación se circunscribe a la esfera más íntima de quien lo padece, el daño a la vida en relación es intrínsecamente un daño susceptible de percepción sensorial, en razón a que su esencia reside en las perturbaciones generadas a las manifestaciones sociales externas no patrimoniales de las personas. Por lo mismo, la existencia de esta categoría de daños puede ser objeto de sencilla verificación a través de los diversos medios de prueba aceptados por nuestro ordenamiento, lo que no justificaría elaborar una presunción sobre los mismos, sino más bien tenerlos como objeto de la carga probatoria de las accionantes.

En efecto, en sustento de lo anterior, es muy importante recordar que el daño moral subjetivo se mueve por terrenos completamente diferentes a los del daño a la vida en relación, por lo que la existencia del primero no puede llevar automáticamente a suponer la presencia del segundo. Por ende, la hipotética existencia de un daño moral no es causa suficiente para derivar, sin más, que, adicionalmente, la vida en relación de las demandantes también se ha visto afectada, pues es indispensable que esta segunda

⁴ Sentencia SC5686-2018 del 19 de diciembre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco. Radicación número. 05736318900120040004201

⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20 de enero de 2009. Expediente 1993 - 0215-01. MP. Pedro Octavio Munar Cadena.

circunstancia se acredite plena y palmariamente, ya que admitir lo contrario es equivalente a desconocer la marcada línea divisoria que existe entre ambas clases de daño.

Al igual que en el anterior acápite, en caso de que resulte probado este tipo de daño, se solicita comedidamente al Honorable Juez que tenga en cuenta la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del presente año, donde calculó este tipo de daño, en caso de muerte, en la suma de \$30.000.000 millones de pesos:

*“En tal virtud, como esta modalidad de perjuicios de orden inmaterial deben ser tasados bajo el prudente juicio del juzgador, la Corte actuando en sede de instancia, considera que, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, la parte demandada deberá indemnizar a la accionante por este rubro en la suma de treinta millones de pesos (\$30.000.000)”.*⁶

Es así, Señor Juez, que en virtud de la ausencia de sustento fáctico, probatorio y estimatorio respecto a este daño, el mismo no está llamado a prosperar. No es posible aceptar, avalar ni declarar el pago de unos supuestos daños que no existen o que el demandante no está en capacidad de probar. Además del factor de la responsabilidad, le corresponde al demandante probar de manera amplia y suficiente la existencia del daño, su proporción y cuantía. En consecuencia, y conforme a los términos expuestos, solicito respetuosamente al Señor Juez que declare fundada la excepción planteada y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones formuladas.

5. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.

Subsidiariamente, se debe considerar que, en el improbable y remoto supuesto de que se reconocieran alguna o algunas de las pretensiones formuladas por el extremo demandante, procedería la correspondiente reducción de la indemnización, en proporción a la participación del menor Edy Santiago Florez Rodríguez en el accidente, derivada de su falta de pericia. Esto se encuentra corroborado por las hipótesis del accidente de tránsito del IPAT, en las que se evidencia que el menor carecía de pericia, no disponía de las señales reflectivas requeridas y no contaba con la licencia de conducción. Al exponerse imprudentemente al riesgo y no tomar las precauciones necesarias, el menor no solo incurrió en una infracción a la normativa de tránsito, sino que también puso en peligro a otros actores viales.

⁶ Sentencia SC665-2019 del siete de marzo de 2019. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Radicación No. 05001 31 03 016 2009-00005-01

Además, como se ha argumentado en las excepciones previamente planteadas, no es factible atribuir el supuesto hecho dañoso a la parte demandada, dado que los demandantes no han demostrado el nexo causal entre la actuación del extremo pasivo y el accidente en cuestión.

En virtud de lo anterior, corresponde aplicar el artículo 2357 del Código Civil, que establece la reducción de la indemnización en función de la participación de la víctima en el hecho dañoso. Es decir, cuando el perjudicado se expone imprudentemente al daño, como aconteció en el presente caso, dado que las consecuencias del accidente se deben exclusivamente a la conducta negligente e imprudente del menor Edy Santiago Florez Rodríguez, quien no tomó las precauciones necesarias para evitar el riesgo tanto para sí mismo como para los demás actores viales.

En consecuencia, el Despacho deberá efectuar un análisis causal exhaustivo de las conductas involucradas en el evento dañoso, con el fin de determinar la incidencia de la víctima en la ocurrencia del daño. Este análisis permitirá, en su caso, reducir la indemnización en proporción a la contribución del perjudicado al daño sufrido. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es imperativo evaluar el grado de contribución de cada agente en el resultado lesivo.

“(…) La (...) graduación de ‘culpas’ en presencia de actividades peligrosas concurrentes, [impone al] (...) juez [el deber] de (...) examinar a plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los elementos de convicción allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garantías procesales y legales.

Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (...) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación ha determinado que si la negligencia de la víctima incidió para considerar que se expuso imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización por mandato del artículo 2357 del Código Civil. Ahora bien, si el hecho de la víctima es generador del daño, ésta será la llamada a soportar las consecuencias de su

proceder, librando de esa manera al demandado. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia precisó:

*“Finalmente, cuando ha sido el hecho de la víctima el generador, de manera exclusiva y determinante del daño, será ella la llamada a soportar las consecuencias de su proceder, pues la obligación de resarcir surge del daño causado a otro, no a sí mismo. De ser aquello, **el demandado también puede ser liberado de su responsabilidad o ésta resultar menguada, junto con el monto a resarcir si coparticipó en la producción del resultado nocivo.***

En el primer evento entonces, no habrá lugar a inculpación si el demandando demuestra que el actuar de la víctima le resultó extraño, imprevisible e irresistible, esto es, que hubo total ruptura del nexo causal. En la segunda hipótesis, esa atribución será parcial, correspondiéndole al juez, con base en los medios de persuasión y en las circunstancias que rodearon el caso, determinar la magnitud e influencia de esa intervención, al igual que los efectos irradiados al monto indemnizatorio, pues de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil «la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente».” (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

En virtud de lo expuesto, resulta imperativo realizar un análisis exhaustivo del origen del daño, a fin de que el juzgador determine, mediante un meticuloso examen de las pruebas, la incidencia del comportamiento de cada interviniente en los hechos que dieron lugar a la reclamación pecuniaria. Específicamente, dado que la responsabilidad del extremo pasivo se ve significativamente disminuida por la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del accidente ocurrido el 14 de octubre de 2018, es evidente que este Despacho debe considerar el contexto en el que se produjo el daño, incluyendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para establecer la incidencia causal de la conducta de la víctima en la materialización del daño objeto de indemnización.

En este orden de ideas, y conforme a la jurisprudencia, dado que se encuentra probado por los medios de prueba disponibles en el expediente que el accidente fue causado exclusivamente por la falta de pericia del menor Edy Santiago Florez Rodríguez, quien se expuso imprudentemente a un riesgo evidente que le ocasionó la muerte, la cual hoy se pretende resarcir, corresponde determinar que el porcentaje de causalidad atribuible a la víctima es, al menos, del 95%. En consecuencia, si se considerara procedente una indemnización por los perjuicios alegados, esta debe ser ajustada en proporción al porcentaje de participación de la víctima en la ocurrencia del accidente.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito respetuosamente que se declare probada esta excepción.

6.CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS

De manera subsidiaria, debe considerarse que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran total o parcialmente las pretensiones esgrimidas por el extremo demandante, correspondería aplicar una reducción proporcional en la indemnización, en función de la contribución que tuvo el conductor de la motocicleta al accidente que provocó la colisión. Esta reducción debe efectuarse sin perjuicio de lo ya demostrado en las excepciones anteriores, que incluyen: (i) La existencia de pruebas y elementos de juicio suficientes, como el Informe de Policía de Accidentes de Tránsito (IPAT), que corroboran la causal eximente de responsabilidad conocida como "Hecho de la Víctima", dado que el menor Edy Santiago Florez Rodríguez asumió imprudentemente el riesgo al participar en una actividad peligrosa sin la debida pericia.

Para respaldar lo anterior, es pertinente citar las disposiciones del Código Civil relacionadas con la reducción de la indemnización en casos donde el daño es resultado de la participación de la víctima en el hecho dañoso. Según el artículo 2357 del Código Civil, la indemnización puede ser reducida en proporción a la contribución de la víctima en la causación del daño, en este caso, la imprudencia del menor al conducir sin la debida pericia.

En consecuencia, si se considerara procedente alguna indemnización, esta debe ser ajustada conforme al grado de participación de la víctima en el accidente. Por lo tanto, solicito respetuosamente que se declare probada esta excepción y se proceda con la reducción de la indemnización en proporción a la contribución del menor en la ocurrencia del accidente.

Por otra parte, la Corte Suprema de justicia ha indicado que cuando un tercero ha sido partícipe del hecho, la indemnización debe reducirse:

“Cuando el hecho lesivo es generado por la acción independiente de varias personas, sin que exista convenio previo ni cooperación entre sí, pero de tal suerte que aún de haber actuado aisladamente, el resultado se habría producido lo mismo, entonces surge la hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente, prevista en el artículo 2537 del ordenamiento civil, según el cual la apreciación del daño está sujeta a reducción (...)”⁷:

Conforme a lo expuesto, corresponde al Despacho llevar a cabo un análisis exhaustivo de la causalidad respecto a las conductas implicadas en el evento dañoso, con el fin de establecer la incidencia de la conducta del menor Edy Santiago Florez Rodríguez en la ocurrencia del daño. Este análisis es fundamental para, en caso de que proceda alguna indemnización, reducirla en proporción a la contribución de la víctima al daño sufrido, derivado de sus propias acciones imprudentes.

La responsabilidad de la demandada debe considerarse mitigada debido a la participación determinante del menor en la ocurrencia del accidente. Por tanto, es imperativo que el fallo considere

⁷ Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-56742018 (20001310300420090019001), Dic. 18/18.

el contexto en el que ocurrió el daño, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para determinar la incidencia causal de las conductas de ambos conductores en el resultado lesivo.

Esta perspectiva ha sido reafirmada por la jurisprudencia en diversas ocasiones, la cual ha establecido que:

“De ahí que, la autoridad judicial demandada se encontraba habilitada para estudiar si se configuraba alguno de los eximentes de responsabilidad, entre los que se encuentra, el hecho de la víctima, como efectivamente lo hizo. Por ello, al encontrar que la actuación de la víctima directa concurrió en la producción del daño, decidió reducir el valor de la indemnización. De modo que, contrario a lo alegado por el actor, el juez de segunda instancia no desbordó el marco de su competencia y tampoco incurrió en el defecto sustantivo alegado.”⁸ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción de los perjuicios:

*“Todo ello, en pos de la responsabilidad que por el riesgo creado debe afrontar la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación— **implica que, en merecimiento de la culpa evidenciada de la víctima, se debe efectuar una reducción en la condena, la cual se estima, por el nivel de incidencia de la negligencia de los demandantes** —propietarios de edificio donde funcionaba el centro comercial—, equivalente al 50% de los perjuicios que lleguen a probarse y concederse en favor de estas personas, ya que del mismo tenor del riesgo que reclaman, fue la imprudencia de los demandantes en la no evitación del daño.”⁹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Como se aprecia, el fallador constató la incidencia de la víctima en la causación del daño y, en consecuencia, procedió a reducir la indemnización de los perjuicios probados en el proceso en el mismo porcentaje correspondiente a la contribución de la víctima. Esta reducción se fundamenta en que la responsabilidad de la demandada resultó disminuida debido a la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del accidente.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. C.P. Milton Chaves García. Radicación 2018-03357

⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicación No. 43112.

De tal manera que el juez debe considerar de manera integral el contexto en el que se produjo el daño, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para determinar la incidencia causal de la conducta tanto de la víctima como del tercero involucrado en el accidente.

En este sentido, habiéndose acreditado por medio de las pruebas del expediente que el menor Edy Santiago Florez Rodríguez tuvo una incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito sucedido el 16 de octubre de 2014, corresponde que se declare que el porcentaje de causación del daño atribuible a la conducta del menor no debe ser inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

7. GENÉRICA O INNOMINADA

Finalmente propongo como excepción genérica, cualquier circunstancia que llegare a ser probada a lo largo del presente proceso y que constituya un acontecimiento de hecho que pueda ser interpretado como exculpatorio de las pretensiones reclamadas por la Demandante.

IV. MEDIOS DE PRUEBA

Con el propósito de sustentar los hechos que configuran las excepciones propuestas en la presente contestación, solicito respetuosamente a Su Despacho que, en concordancia con lo establecido en el numeral 7 del artículo 372 del Código General del Proceso (C.G.P.), se decreten, practiquen y consideren las siguientes pruebas en el momento procesal oportuno.

1. DECLARACIÓN DE PARTE

Conforme lo establece el artículo 198 del C.G.P. solicito que al momento de decretar las pruebas del proceso se fije fecha y hora con el propósito de efectuar interrogatorio a instancia de parte a las demandantes Olga Lucia Rodríguez Romero y Diana Lizeth Florez Rodríguez sobre los hechos que constituyen la demanda, sus sustentos y las demás relacionadas con el presente pleito, diligencia que se practicará por presentación de pliego o en forma verbal conforme las ritualidades del procedimiento para este litigio.

2. TESTIMONIALES

Solicito se recepciones los testimonios de las siguientes personas:

2.1. MIRTHA LEONOR MATABAJÓY CRIOLLO, mayor de edad, vecina de Chachagüi Vereda Chaman Nariño), identificada con C.C. No. 52.428.540, quien podrá ser notificada en la vereda Chaman del Municipio de Chachagüi, se desconoce su correo electrónico.

2.2. JOSE ARCELIO CANCEMANSI MATABAJAY, mayor de edad, vecino de Chachagüi Vereda Chaman (Nariño), identificado con C.C. No. 98.394.361, quien podrá ser notificado en la vereda Chaman del Municipio de Chachagüi, se desconoce su correo electrónico.

Estos testimonios son útiles y necesarios para establecer los perjuicios que dicen las demandantes haber sufrido.

2.3. JOHN OJEDA BARRERA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1085275119 como miembro de la Policía Nacional identificado con la placa 177792 de dicha institución, quien puede ser citado a través de la dirección de talento humano de la Policía Nacional en la carrera 59 # 26 -21 CAN Bogotá piso 1 correo electrónico denar.notificacion@policia.gov.co, para que de acuerdo con su conocimiento del accidente objeto de la presente acción declare sobre las circunstancias que encontró en la escena de los acontecimientos, elementos de convicción y demás circunstancias que le consten en su calidad de signante del INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO C.00752096.

3. DICTAMEN PERICIAL.

De la lectura del acápite de pruebas del escrito de demanda, se observa que fue aportado un supuesto dictamen pericial que solicita que se decrete, denominado **“INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”**, documento elaborado por el señor NIXON ADALBERTO ORTIZ MARÍN.

No obstante, al revisar el documento que se pretende presentar como dictamen pericial, deviene evidente que este NO cumple con los requisitos que prevé el artículo 226 del CGP para su decreto.

El artículo 226 del CGP señala, en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener todo dictamen, los siguientes:

“El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.
2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito.
3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los

títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen". (Se destaca)

De la lectura del supuesto dictamen pericial, deviene evidente que estos, cuando menos, no cumplen con los requisitos señalados en los numerales 4 y 6 del artículo 226 del CGP.

Ante los sendos e inocultables defectos en los que incurre el documento que pretende incorporar la Parte Demandante, el supuesto dictamen pericial aportado por los Accionantes no debe ser decretado.

Por lo anterior, debe el Honorable Despacho negar la solicitud del dictamen pericial.

Ahora bien, en el improbable evento de que el Despacho llegará a decretarlo, en los términos del artículo 228 del CGP, solicito al Despacho que se cite al perito a audiencia para surtir la contradicción del dictamen.

4. PRUEBA TRASLADA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 y siguientes del C.G.P., comedidamente ruego se oficie a FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – UNIDAD DE VIDA – HOMICIDIO CULPOSO

FISCALIA 07 SECCIONAL, para que con destino a este proceso remita la totalidad del expediente bajo noticia criminal No. 520016116211201881334 por el delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito en contra de Jonatan Desiderio Acero Saenz. Esta solicitud se formula teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible obtener esta información por vía del Derecho de Petición que fue efectivamente radicado ante la mencionada entidad en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 10 del artículo 78 del C.G.P.

El propósito de la exhibición de este documento es evidenciar las condiciones relacionadas con el accidente, la valoración probatoria, elementos probatorias y demás razones que rodearon el accidente de tránsito acaecido el pasado 14 de octubre de 2018.

La FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – UNIDAD DE VIDA – HOMICIDIO CULPOSO FISCALIA 07 SECCIONAL, puede ser notificada en la Avenida Calle 24 No. 52 – 01 en la ciudad de Bogotá, o al correo electrónico jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co.

V. ANEXOS

1. Copia del derecho de petición presentado a la fiscalía general de la Nación.


VI. NOTIFICACIONES

La parte actora en el lugar indicado en la demanda.

Mi representado, recibirá notificaciones en la carrera 7 C Este 88 – 80 Sur San Felipe de la ciudad de Bogotá D.C. correo electrónico jhonatanacero80@gmail.com

La suscrita apoderada recibirá notificaciones en la carrera 6 #27-20 Edificio Antares Oficina 102 en la ciudad de Bogotá sofimalaver@hotmail.com

Del señor Juez, respetuosamente.



THALIA SOFIA MALAVER MORA

C.C. # 1018485639 de Bogotá

T.P.# 361287 del C. S. de la J.


 Eliminar  Archivar  Informar  Responder  Zoom  Leído / No leído 

COPIAS EXPEDIENTE 520016116211201881334



leandro toledo arcila

 Responder

 Responder a todos

 Reenviar



Para: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Mar 17/09/2024 2:31 PM



DERECHO DE PETICIÓN JHO...

142 KB



Cordial saludo,

adjunto derecho de petición solicitando copias expediente 520016116211201881334

Atentamente,

Leandro toledo Arcila
Abogado

 Responder

 Reenviar

Señor

FISCAL QUINTA (5) SECCIONAL UNIDAD DE VIDA

PASTO

E.

S.

D.

NOTICIA CRIMINAL: 520016116211201881334

INDICIADO: JHONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ

VICTIMA: EDY SANTIAGO FLORES RODRIGUEZ

DELITO: HOMICIDIO CULPOSO

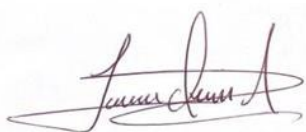
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN-COPIAS EXPEDIENTE PENAL

LEANDRO TOLEDO ARCILA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado del indiciado el señor JHONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1022975597 por medio del presente escrito elevo Derecho Fundamental de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, y reglamentado en la Ley 1755 de 2015 y demás normatividad concordante para que se sirva expedir a mi costa copia completa del expediente de la referencia.

Quedo atento a su respuesta en los términos de ley, no sin antes advertir del derecho fundamental a la información que le asiste constitucionalmente hablando a mi representado, advirtiéndole que de no atenderse dentro de los términos y alcances que la norma establece para la respuesta, tendré que entrar a tutelar el derecho fundamental que, con su silencio; si se da este se le está conculcando a la víctima.

Por consiguiente, sírvase seguir con el trámite correspondiente

Atentamente,



LEANDRO TOLEDO ARCILA

C. C. 97613868

T.P 369021 el C. S. de la J.

 Eliminar  Archivar  Informar  Responder  Zoom  Leído / No leído 

Fwd: COPIAS EXPEDIENTE 520016116211201881334

JJ

Juridica Notificaciones Judiciales <jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov>

Para: Gestion Documental PQRS Paloquemado

Mar 17/09/2024 2:35 PM

CC: Usted



DERECHO DE PETICIÓN JHO...

142 KB

En virtud de lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 1437 del 2011, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, y acorde con los alineamientos emitidos por la Señora Fiscal General de la Nación en la Directiva 001 de 2022, remito por competencia la petición del asunto para el trámite que en derecho corresponda.

FM

----- Forwarded message -----

De: **leandro toledo arcila** <toledoleandro@outlook.com>

Date: mar, 17 sept 2024 a la(s) 2:32 p.m.

Subject: COPIAS EXPEDIENTE 520016116211201881334

To: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co <jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>

Cordial saludo,

adjunto derecho de petición solicitando copias expediente 520016116211201881334

Atentamente,

Leandro toledo Arcila

Abogado

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



Responder



Responder a todos



Reenviar

Doctora
MARTHA LIDA ROSERO DE BASTIDAS
JUEZA
Juzgado Tercero Civil de Circuito
Pasto- Nariño
E.S.D.

REFERENCIA. RADICADO No. 2024-00016
DECLARATIVO VERBAL- RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL.
DEMANDANTE. OLGA LUCIA RODRIGUEZ Y OTRO
DEMANDADO. JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ
LLAMADA EN GARANTÍA. SURA.

ASUNTO. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

THALIA SOFÍA MALAVER MORA, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada del demandado **JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ**, conforme al poder que obra en su despacho y a la providencia emitida por el mismo, mediante la cual se me reconoció personería adjetiva para actuar dentro del proceso de referencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 65 del Código General del Proceso interpongo demanda para que dentro del asunto indicado en la referencia se proceda a llamar en **GARANTÍA** a **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, en los siguientes términos:

I. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTE.

JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 1022975597 de Bogotá, domiciliado en Bogotá.

APODERADA JUDICIAL DEL DEMANDANTE.

THALIA SOFIA MALAVER MORA, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1018485639 expedida en Bogotá y T.P. 361287 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

DEMANDADO. (llamado en garantía)

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. sociedad comercial de derecho privado con domicilio principal en la ciudad de Medellín identificada con el NIT 890.903.407-9 vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

REPRESENTANTE LEGAL DEL DEMANDADO.

DIEGO ANDRES AVENDAÑO CASTILLO en calidad de Representante Legal Judicial quien se identifica con la cédula de ciudadanía 74.380.936 o quien haga sus veces.

II. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Solicito al señor Juez que previamente a decidir de fondo sobre la demanda principal se resuelva sobre la relación sustancial que se aduce con base en el llamamiento en garantía y en desarrollo de la demanda interpuesta se hagan las siguientes o similares declaraciones:

PRIMERA. Declarar que entre SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. en calidad de Compañía Aseguradora legalmente establecida en Colombia, supervigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, identificada con NIT 890.903.407-9 y JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ existió una relación contractual de seguro representada en la póliza de seguro de automóviles número 7696670-7 con vigencia entre el 01 de enero de 2018 y el 01 de enero de 2019 asegurando el vehículo marca: BMW X4 F26 XDRIVE20D X TP 2000 CC TD CT, clase campero, motor 78565080, chasis WBAXX1103J0Y47995, servicio particular, modelo 2018 placa EDX 799.

SEGUNDA. Declarar que la póliza de Seguro de automóviles antes mencionada expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. tomó el riesgo asegurado descrito en la pretensión primera y otorgaba en favor de JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ la cobertura denominada Daños a Terceros hasta por la suma de TRES MIL CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$3.040.000.000°°) sin ningún tipo de deducible pactado.

TERCERA. En el evento de establecerse que existe Responsabilidad Civil Extracontractual de JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ derivada de los daños sufridos por los demandantes conforme con el artículo 1127 del C. de Co. se imponga a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. en su calidad de asegurador de la R.C.E. de JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ, la obligación de pagar a los demandantes la indemnización que a éstos les corresponda con las sumas ordenadas en la sentencia debidamente ejecutoriada dentro de los límites contratados.

CUARTA. En caso de que haya oposición a la demanda y a las pretensiones expresadas sin que las mismas prosperen se condene en costas y agencias en Derecho.

III. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

PRIMERO. El 14 de octubre de 2018 en la vía Pasto- Mojarras Km 34+550 se presentó un accidente de tránsito tipo choque que involucró el vehículo de placas EDX 799 y la motocicleta de placas AYE 92E, según Informe Policial de Accidente de Tránsito aportado en la demanda.

SEGUNDO. El vehículo de placas EDX 799 para el momento de los hechos era conducido por Jonatan Desiderio Acero Saenz.

TERCERO. A raíz del hecho en mención se produjo la muerte del menor Edy Santiago Florez Rodríguez.

CUARTO. Como consecuencia del fallecimiento antes mencionado, Olga Lucía Rodríguez Romero y Diana Lizeth Flórez Rodríguez instauraron una demanda verbal por responsabilidad civil extracontractual en contra de Jonatan Desiderio Acero Sáenz. En dicha demanda, se solicita que se declare civilmente responsable al demandado y, en consecuencia, se le condene al pago de los daños extrapatrimoniales sufridos por las demandantes.

IV. RAZONES PROCESALES DE LA DEMANDA

PRIMERA. Jonatan Desiderio Acero Saenz le fue notificado por medio de conducta concluyente el auto admisorio de la demanda dentro del proceso declarativo verbal de Olga Lucia Rodriguez Romero y Diana Lizeth Florez Rodriguez y en consecuencia de contestó la demanda por su parte.

SEGUNDA. Dentro del término para contestar la demanda se procede con el presente llamamiento en garantía.

V. PRUEBAS

DOCUMENTALES

1. De acuerdo con el párrafo del artículo 1046 del Código de Comercio anexo archivo en formato PDF de la carátula del contrato la póliza de Seguros de Automóviles número 7696670-7 tomada por JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ y expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sirven como fundamentos legales para el presente llamamiento en garantía los contenidos en los artículos 64, 65 y 66 del Código General del Proceso que reglan la figura del llamamiento en Garantía, los artículos 1036 y siguientes del Código de Comercio que regulan lo pertinente al Contrato de Seguro y el artículo 1127 y siguientes de la misma obra que reglamentan el seguro de responsabilidad.

Adicionalmente el llamamiento se realiza en virtud de la existencia de un contrato de seguro válidamente celebrado con una Compañía autorizada para asegurar este tipo de riesgos, vigente para la fecha de los hechos y que expresamente ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual.

VII. CUANTÍA DEL PROCESO

Atendiendo a que las pretensiones de la demanda superan los 150 SMMLV para la fecha de presentación de la demanda y que el llamamiento en garantía es para dicho proceso, la presente acción se debe adelantar por el proceso Verbal.

VIII. ANEXOS

1. Archivo en formato PDF del certificado de existencia y representación legal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia
2. La prueba documental anunciada en el acápite de pruebas.

IX. NOTIFICACIONES

EL DEMANDANTE

Recibe notificaciones en la carrera 7 C Este 88 – 80 Sur San Felipe de la ciudad de Bogotá D.C. correo electrónico jhonatanacero80@gmail.com

THALIA SOFIA MALAVER MORA como apoderada del demandante en la carrera 6 # 27-20 oficina 102 Edificio Antares- Bogotá y en el correo electrónico sofimalaver@hotmail.com

DEMANDADA- LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. recibe notificaciones en la carrera 63 # 49 31 piso 1 edificio Camacol y correo electrónico notificacionesjudiciales@suramericana.com.co.

Del señor Juez, respetuosamente.



THALIA SOFIA MALAVER MORA

C.C. # 1018485639 de Bogotá

T.P.# 361287 del C. S. de la J.



CONSULTORES JURÍDICOS



ASEGÚRATE DE CONOCER TU PÓLIZA

SEGUROS DE AUTOS

Seguros | **SURA**

BANCOLOMBIA SA
CR 67 A # 9 A 75
BOGOTA D.C.
5947 - 2491

CARÁTULA PLAN AUTO GLOBAL

Y RECIBO DE PAGO
SEGUROS SUFI

Este documento es la carátula de tu póliza y contiene la información, coberturas y beneficios particulares del compromiso que SURA adquiere contigo.

TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)				
Razón Social BANCOLOMBIA SA				
NIT:	8909039388	Dirección: CR 67 A # 9 A 75	Ciudad: BOGOTA D.C.	Tel: 3226044
Correo electrónico:				
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA				
Núm. de póliza	Núm. de documento	Oficina de radicación	Número de Crédito	Ref. de pago
7696670-7	59859740	2491 - DEUDORES SUFI	12852243	04059859740




ASEGURADO (PROPIETARIO DEL CARRO)			
Nombres y apellidos	JONATAN DESIDERIO ACERO SAENZ	CC	1022975597
BENEFICIARIO			
Razón Social	BANCOLOMBIA SA	NIT	8909039388



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARRO					
Placa	Marca - tipo - características	Modelo	Clase	Valor referencia	Valor accesorios
EDX799	BMW X4 F26 XDRIVE20D X TP 2000CC TD CT	2018	CAMPERO	\$169.900.000	\$0

Riesgo	Servicio	Código Fasecolda	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación	% de bonificación
205	PARTICULAR	00808044	78565080	WBAXX1103J0Y47995	BOGOTA D.C.	50,00%

 COBERTURAS CONTRATADAS		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A BIENES	\$0	\$3.040.000.000
	MUERTE O LESIONES A PERSONAS		
	GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL		
DAÑOS AL CARRO	PÉRDIDA PARCIAL	Si el arreglo vale menos de \$1.690.000 deberás asumirlo, si vale más, todo lo paga SURA	VALOR DEL DAÑO
	PÉRDIDA TOTAL	\$0	VALOR COMERCIAL
	GASTOS DE TRANSPORTE PÉRDIDA TOTAL	\$0	Recibes \$80.000 diarios hasta por 30 días
HURTO AL CARRO	PÉRDIDA PARCIAL	Si el arreglo vale menos de \$1.690.000 deberás asumirlo, si vale más, todo lo paga SURA	VALOR DEL DAÑO
	PÉRDIDA TOTAL	\$0	VALOR COMERCIAL
	GASTOS DE TRANSPORTE PÉRDIDA TOTAL	\$0	Recibes \$80.000 diarios hasta por 30 días
CARRO DE REEMPLAZO	PÉRDIDAS PARCIALES	\$0	20 días
	PÉRDIDAS TOTALES	\$0	20 días
ACCIDENTES	ACCIDENTES AL CONDUCTOR	\$0	\$35.000.000
ASISTENCIA	ASISTENCIA GLOBAL	\$0	\$0
LLAVES	PÉRDIDA DE LLAVES	\$0	VALOR DE LAS LLAVES

VIGENCIA Y VALOR DEL SEGURO

VIGENCIA DEL SEGURO			FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN O RENOVACIÓN			FECHA DE EXPEDICIÓN	CIUDAD DE EXPEDICIÓN	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	TOTAL PRIMA ANUAL
Días	Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta	02 DE ENERO DE 2018	BOGOTÁ D.C.	\$2.750.030	\$522.506	\$3.272.535
365	01-ENE-2018	01-ENE-2019	365	01-ENE-2018	01-ENE-2019					

DOCUMENTO DE: INGRESO DE RIESGOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recuerde que esta póliza se renovará automáticamente cada año y tendrá vigencia hasta el momento en el que se cancele el contrato de Leasing o el crédito o hasta que se genere la última facturación de su crédito que incluya el cobro de este seguro, fecha en la cual cesará la cobertura para este vehículo y usted deberá contratar otra póliza de seguro.

Las condiciones generales de la póliza, incluyendo el detalle de compromiso que SURA adquirió contigo las encontrarás en el clausulado adjunto a la carátula.



"Si has contratado la cobertura de Carro de Reemplazo, se te prestará un automóvil económico, Chevrolet, Renault o similar a estos. El carro deberá ser recogido en la agencia del proveedor más cercano.

En el momento que te entreguen el carro, deberás dejar un depósito con tu tarjeta de crédito por el valor previamente definido por el proveedor, éste es para cubrir posibles daños ocasionados al carro, si no se ocasiona ningún daño el depósito no se hará efectivo. En caso de no tener tarjeta de crédito o no querer usar esta opción, puedes depositar una suma fija establecida por cada día que uses el carro de reemplazo, si tomas esta opción no habrá devolución del dinero."



Este Seguro se terminará:

- a) Por mora en el pago de la prima.
- b) Cuando lo solicites por escrito a SURA.
- c) Cuando SURA te lo informe por escrito.
- d) Para la cobertura de accidentes al conductor, después de pagada una indemnización.

En los casos en que hayas pagado la prima por adelantado SURA te devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que el carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberás pagar los días que tuviste la cobertura.



NOTA:SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes.

NOTA:SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

VIGENCIA DESDE DICIEMBRE 28/17

Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor.

Somos grandes contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre el IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente [decreto reglamentario 2509/85 art. 17. Autorretenedores resolución n° 009961]

DATOS DEL ASESOR

Código	Nombres del asesor	Oficina	Compañía
5947	WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A.	4030	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación de la proforma
01 - 01 - 2017	13 - 18	P	03	F-01-40-209

Firma autorizada

Cajero o cobrador autorizado



Certificado Generado con el Pin No: 4635261455877095

Generado el 17 de septiembre de 2024 a las 14:51:13

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN
EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

**RAZÓN SOCIAL: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA
"SEGUROS GENERALES SURA"**

NIT: 890903407-9

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 4438 del 12 de diciembre de 1944 de la Notaría 2 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Bajo la denominación de COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.

Escritura Pública No 2295 del 24 de diciembre de 1997 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Se protocolizó el acto de escisión de la COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., la cual segrega una parte de su patrimonio con destino a la constitución de la sociedad denominada "SURAMERICANA DE INVERSIONES S. A. SURAMERICANA"

Resolución S.F.C. No 2197 del 01 de diciembre de 2006 La Superintendencia Financiera aprueba la escisión de la Compañía Suramericana de Seguros S.A., la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. y la Compañía Suramericana de Capitalización S.A., constituyendo la sociedad beneficiaria "Sociedad Inversionista Anónima S.A.", la cual no estará sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, protocolizada mediante Escritura Pública 2166 del 15 de diciembre de 2006 Notaria 14 de Medellín, aclarada mediante Escritura Pública 0339 del 02 de marzo de 2007, Notaria 14 de Medellín

Resolución S.F.C. No 0810 del 04 de junio de 2007 por medio de la cual la Superintendencia Financiera aprueba la cesión de activos, pasivos, contratos y de cartera de seguros de la Compañía Agrícola de Seguros S.A. y de la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A. a favor de la Compañía Suramericana de Seguros S.A., la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. y de la Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A. SURATEP.

Escritura Pública No 0822 del 13 de mayo de 2009 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Cambia su razón social de COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. por la de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Resolución S.F.C. No 0889 del 14 de julio de 2016 , la Superintendencia Financiera no objeta la fusión por absorción entre Seguros Generales Suramericana S.A. (entidad absorbente) y Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. (entidad absorbida), protocolizada mediante escritura pública 835 del 01 de agosto de 2016 Notaria 14 de Medellín

Escritura Pública No 36 del 22 de enero de 2018 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Cambia su razón social de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., pudiendo emplear la sigla "Seguros Generales SURA"

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 675 del 13 de abril de 1945



Certificado Generado con el Pin No: 4635261455877095

Generado el 17 de septiembre de 2024 a las 14:51:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL: ARTÍCULO 45.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal será múltiple y la gestión de los negocios sociales está simultáneamente a cargo de un Presidente, de uno o más Vicepresidentes, el Gerente de Negocios Empresariales, el Gerente de Inversiones y Tesorería; el Secretario General, y demás Representantes Legales, según lo defina la Junta Directiva, quienes podrán actuar conjunta o separadamente. Así mismo, se elegirán uno o más Gerentes Regionales, que serán nombrados por la Junta Directiva y ejercerán la representación legal de la Sociedad con las mismas facultades y atribuciones establecidas en estos estatutos para dicho cargo, funciones que podrán ejercer únicamente dentro de su respectiva región y zonas que sean a ellas suscritas. **PARÁGRAFO PRIMERO.-** Para efectos de la representación legal judicial de la Sociedad, tendrá igualmente la calidad de representante legal el Gerente de Asuntos Legales o su suplente, así como los abogados que para tal fin designe la Junta Directiva, y representarán a la Sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, y/o con funciones administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado; así mismo los representantes legales judiciales podrán otorgar poder a abogados externos para representar a la Sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas y/o con funciones administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. **ARTÍCULO 46.- DESIGNACIÓN:** Los representantes legales serán designados por la Junta Directiva y serán removibles por ella en cualquier tiempo. **ARTÍCULO 47.- POSESIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:** Los representantes legales deberán, cuando la ley así lo exija, iniciar su trámite de posesión como tales ante la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, inmediatamente sean elegidos. **ARTÍCULO 48.- FUNCIONES:** Son funciones de los representantes legales: (A) Representar legalmente la Sociedad y tener a su cargo la inmediata dirección y administración de sus negocios. (B) Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. (C) Celebrar en nombre de la Sociedad todos los actos o contratos relacionados con su objeto social. (D) Nombrar y remover libremente a los empleados de sus dependencias, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que pueda hacerle la Junta Directiva. Así mismo nombrar los administradores de los establecimientos de comercio (E) Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos. (F) Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario, o conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los estados financieros de prueba y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la Sociedad y con sus actividades. (G) Presentar a la Asamblea General de Accionistas anualmente, en su reunión ordinaria, los estados financieros de fin de ejercicio, junto con los informes y proyecto de distribución de utilidades y demás detalles e informaciones especiales exigidos por la ley, previo el estudio, consideraciones y aprobación inicial de la Junta Directiva. (H) Someter a aprobación de la Junta Directiva, en coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT y sus actualizaciones. (I) Las demás que le corresponden de acuerdo con la ley y estos Estatutos. **ARTÍCULO 49.- FACULTADES:** Los Representantes Legales están facultados para celebrar o ejecutar, sin otra limitación que la establecida en los Estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva, o por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que tengan el carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que la Sociedad persigue, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Los Representantes Legales podrán transigir, comprometer y arbitrar los negocios sociales, promover acciones judiciales e interponer todos los recursos que fueren procedentes conforme a la ley, recibir, sustituir, adquirir, otorgar y renovar obligaciones y créditos, dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, y delegar facultades, otorgar mandatos y sustituciones con la limitación que se desprende de estos Estatutos. (Escritura Pública No. 317 del 31/03/2022 Not. 14 de Medellín).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Juan David Escobar Franco Fecha de inicio del cargo: 05/02/2016	CC - 98549058	Presidente
Luis Guillermo Gutiérrez Londoño Fecha de inicio del cargo: 01/12/2016	CC - 98537472	Representante Legal en Calidad de Vicepresidente



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 4635261455877095

Generado el 17 de septiembre de 2024 a las 14:51:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Ana Cristina Gaviria Gómez Fecha de inicio del cargo: 20/05/2021	CC - 42896641	Vicepresidente de Seguros
Diego Alberto De Jesus Cardenas Zapata Fecha de inicio del cargo: 23/11/2023	CC - 98527423	Gerente Regional Centro
Alejandro Ossa Cárdenas Fecha de inicio del cargo: 27/07/2023	CC - 94517028	Gerente Regional Occidente
July Natalia Gaona Prada Fecha de inicio del cargo: 05/02/2020	CC - 63558966	Representante Legal Judicial
Maria Nathalia Vallejo Franco Fecha de inicio del cargo: 24/04/2024	CC - 1088331874	Representante Legal Judicial
Daniela Castro Gaitan Fecha de inicio del cargo: 18/03/2024	CC - 1234091324	Representante Legal Judicial
Cindy Paola Plata Zarate Fecha de inicio del cargo: 18/03/2024	CC - 1140863452	Representante Legal Judicial
Vanessa Cano Pantoja Fecha de inicio del cargo: 18/03/2024	CC - 1107517660	Representante Legal Judicial
Juliana Salazar Mesa Fecha de inicio del cargo: 02/05/2023	CC - 1037629278	Representante Legal Judicial
Sara Valencia Morales Fecha de inicio del cargo: 02/05/2023	CC - 1036641080	Representante Legal Judicial
María Del Pilar Vallejo Barrera Fecha de inicio del cargo: 01/07/2004	CC - 51764113	Representante Legal Judicial
Ana María Restrepo Mejía Fecha de inicio del cargo: 06/07/2009	CC - 43259475	Representante Legal Judicial
Marcela Montoya Quiceno Fecha de inicio del cargo: 04/05/2010	CC - 42144396	Representante Legal Judicial
Dora Cecilia Barragan Benavides Fecha de inicio del cargo: 04/11/2011	CC - 39657449	Representante Legal Judicial
Ana Maria Rodríguez Agudelo Fecha de inicio del cargo: 10/04/2012	CC - 1097034007	Representante Legal Judicial
Diego Andres Avendaño Castillo Fecha de inicio del cargo: 04/02/2014	CC - 74380936	Representante Legal Judicial
Sandra Isleni Ángel Torres Fecha de inicio del cargo: 10/10/2014	CC - 63483264	Representante Legal Judicial
Beatriz Eugenia López González Fecha de inicio del cargo: 11/11/2014	CC - 38879639	Representante Legal Judicial
Natalia Andrea Infante Navarro Fecha de inicio del cargo: 01/11/2016	CC - 1037602583	Representante Legal Judicial
Maria Alejandra Zapata Pereira Fecha de inicio del cargo: 01/11/2016	CC - 1151935338	Representante Legal Judicial
David Ricardo Gómez Restrepo Fecha de inicio del cargo: 20/04/2017	CC - 1037607179	Representante Legal Judicial
Julián Alberto Cuadrado Luengas Fecha de inicio del cargo: 02/11/2017	CC - 1088319072	Representante Legal Judicial



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 4635261455877095

Generado el 17 de septiembre de 2024 a las 14:51:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Lina Marcela García Villegas Fecha de inicio del cargo: 06/06/2018	CC - 1128271996	Representante Legal Judicial
Diana Carolina Gutiérrez Arango Fecha de inicio del cargo: 26/09/2018	CC - 1010173412	Representante Legal Judicial
Lina Maria Angulo Gallego Fecha de inicio del cargo: 19/12/2018	CC - 67002356	Representante Legal Judicial
Juan Diego Maya Duque Fecha de inicio del cargo: 12/11/2019	CC - 71774079	Representante Legal Judicial
Marisol Restrepo Henao Fecha de inicio del cargo: 05/04/2020	CC - 43067974	Representante Legal Judicial
Shannon Katherine Borja Casarrubia Fecha de inicio del cargo: 28/05/2020	CC - 1045699377	Representante Legal Judicial
Carolina Sierra Vega Fecha de inicio del cargo: 29/05/2020	CC - 43157828	Representante Legal Judicial
Miguel Orlando Ariza Ortiz Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1101757237	Representante Legal Judicial
Juliana Aranguren Cárdenas Fecha de inicio del cargo: 13/05/2021	CC - 1088248238	Representante Legal Judicial
Nazly Yamile Manjarrez Paba Fecha de inicio del cargo: 27/08/2021	CC - 32939987	Representante Legal Judicial
Carlos Francisco Soler Peña Fecha de inicio del cargo: 27/08/2021	CC - 80154041	Representante Legal Judicial
Natalia Alejandra Mendoza Barrios Fecha de inicio del cargo: 12/11/2021	CC - 1143139825	Representante Legal Judicial
Carolina Montoya Vargas Fecha de inicio del cargo: 26/10/2022	CC - 43871751	Representante Legal Judicial
Daniela Isaza Lema Fecha de inicio del cargo: 25/11/2022	CC - 1037617487	Representante Legal Judicial
Daniel José Alzate López Fecha de inicio del cargo: 09/11/2023	CC - 7552930	Gerente Regional Antioquia
Javier Ignacio Wolff Cano Fecha de inicio del cargo: 07/03/2013	CC - 71684969	Gerente Regional Eje Cafetero
Rafael Enrique Díaz Granados Nader Fecha de inicio del cargo: 20/02/2012	CC - 72201681	Gerente Regional Zona Norte
Luz Marina Velásquez Vallejo Fecha de inicio del cargo: 09/05/2019	CC - 43584279	Vicepresidente de Talento Humano
Melisa González González Fecha de inicio del cargo: 30/05/2019	CC - 1128273241	Gerente de Inversiones y Tesorería
Margarita María Henao Arango Fecha de inicio del cargo: 14/09/2023	CC - 32108380	Gerente de Negocios Empresariales
Carolina Sierra Vega Fecha de inicio del cargo: 13/07/2023	CC - 43157828	Secretaria General y Gerente de Asuntos Legales

RAMOS: Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automóviles, aviación, corriente débil,



Certificado Generado con el Pin No: 4635261455877095

Generado el 17 de septiembre de 2024 a las 14:51:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

cumplimiento, Estabilidad y calidad de la vivienda nueva, incendio, lucro cesante, manejo, montaje y rotura de maquinaria, multirriesgo familiar, navegación, responsabilidad civil, riesgos de minas y petróleos, semovientes, sustracción, terremoto, todo riesgo para contratistas, transportes, vidrios. con Circular Externa Nro. 52 del 20/12/2002 a) Se eliminó el ramo de estabilidad y calidad de la vivienda nueva. b) El ramo de multirriesgo familiar se comercializará bajo el ramo de hogar. c) El ramo de riesgos de minas y petróleos se denominará ramo de minas y petróleos.

Con Resolución SFC 0461 del 16 de abril de 2015 se revoca la autorización concedida para operar el ramo de seguro de semovientes.

Resolución S.B. No 937 del 11 de marzo de 1992 agrícola (con Circular Externa 008 del 21 de abril de 2015 se incorpora este ramo, en el ramo de Seguro Agropecuario. Así las cosas, el ramo de seguro Agropecuario estará conformado por los ramos Agrícola, semovientes, así como otros relacionados con recursos naturales, vegetales y animales)

Resolución S.F.C. No 0810 del 04 de junio de 2007 autoriza el ramo de Seguro de daños corporales causado en las personas en accidentes de tránsito SOAT.

Resolución S.F.C. No 1652 del 29 de octubre de 2009 se autoriza el ramo de desempleo

Escritura Pública No 835 del 01 de octubre de 2016 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Como consecuencia de la absorción de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. asume los ramos autorizados mediante Resolución 02418 del 27/12/2006: autoriza Ramo de accidentes personales, vida, grupo, salud y exequias. Comercialización de los modelos de las pólizas que se señalan a continuación, dentro de los ramos indicados así: en el Ramo Accidentes personales, la PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES; en el ramo Vida Grupo, la PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA GRUPO "BÁSICO"; en el ramo de salud, la PÓLIZA ROYAL SALUD INTEGRAL; y en el ramo de exequias, la PÓLIZA DE SEGUROS DE EXEQUIAS.

Oficio No 2021251642-016 del 21 de diciembre de 2021 se autoriza el ramo de Seguro Decenal


NATALIA GUERRERO RAMÍREZ

**NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."